

EDITORIAL

ESTADO DE LA NACION Y CONSENSO

El presidente del Gobierno al comenzar su discurso-informe a la nación el 23 de octubre señaló, a nuestro juicio con acierto, que a mitad de la legislatura un análisis de la situación española debía basarse en esta pregunta: "¿La situación de España es mejor que en 1982?"

Al oír este planteamiento del debate parlamentario creímos que este año ciertamente íbamos a contar con un análisis riguroso sobre la política económica, la política de empleo, la política exterior, la política autonómica, etc., y sus efectos positivos y negativos. Pero esa esperanza pronto se desvaneció. Es cierto que Felipe González presentó en su informe una serie de datos económicos sobre la reducción de la inflación que de un 14,4 por 100 en 1982 se quedará en algo más del 9 por 100 en 1984; sobre el crecimiento del PIB que pasó de 0,7 por 100 de incremento en 1982 al 2,1 por 100 en 1983 y al 2,5 por 100 previsto para 1984 y sobre la balanza de pagos por cuenta corriente que teniendo en 1982 un déficit de 4.125 millones de dólares cerrará el año 1984 con un superávit aproximado de 1.500 millones de dólares.

Naturalmente ésta es la cara positiva del análisis de la situación económica que hizo el presidente del Gobierno y que ya conocíamos por los informes de la OCDE, el FMI y el Banco de España (véase el estudio "La situación económica a examen" publicado en el número anterior de esta revista), así como por los informes de la CEOE, la CEIM y la prensa económica en general (ver en este mismo número el artículo de J. Gorosquieta titulado "Dominar la crisis y crear empleo"). Precisamente por conocer esos datos y estar avalados por organizaciones solventes de fuera y de dentro de España nos extrañó que el líder de la oposición mayoritaria no iniciara su disertación reconociendo esos tres aspectos positivos y de mejora de la situación económica española.

Pero en todo balance socioeconómico, especialmente en medio de una crisis económica duradera, hay por definición también una cara negativa. Los organismos mencionados en el párrafo anterior señalan también como aspectos o puntos negativos de la actual política econó-

EDITORIAL

mica: el elevado déficit público que prácticamente se mantiene el mismo de 1982, en torno al 5,7 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB); la caída del ahorro y la inversión y el aumento notable del paro.

Sobre estos aspectos negativos también hay datos relativamente objetivos que el presidente del Gobierno silenció y el líder de la oposición mayoritaria exageró llegando a calificar el estado de la nación "de pronóstico reservado, por no decir grave". Está bien la rectificación de Felipe González al reconocer que se equivocó el año anterior al afirmar que se había tocado fondo en el problema del desempleo. Pero en un análisis de la situación económica no basta la rectificación, ni sólo añadir, por enésima vez, que se está frenando el proceso de destrucción de puestos de trabajo.

Hay que ofrecer los datos que existen tales como el que en los dos últimos años el paro ha aumentado en 450.000 desempleados más; que si bien es verdad que la inflación ha descendido en cinco puntos, el índice de paro ha aumentado casi cinco puntos también al situarse en el 20/21 por 100 de la población activa; que el plan de empleo rural (antiguo empleo comunitario) aplicable a más de 100.000 jornaleros de Andalucía y Extremadura ha fracasado puesto que el 70 por 100 de esos jornaleros no habrán logrado las 60 jornadas de trabajo para poder tener derecho al subsidio de desempleo el próximo año.

No tratamos de recargar las tintas negras, pues, hemos comenzado reconociendo los aspectos positivos. Simplemente pretendemos decir que ni el presidente del Gobierno, ni los líderes de la oposición (con la excepción en parte sólo de Miguel Roca) ofrecieron a los españoles un análisis serio, realista e imparcial sobre la situación económica y social. Lo mismo hay que decir sobre los otros temas como la reconversión industrial, sanidad, educación, política de rentas, seguridad ciudadana que sólo se abordaron tangencialmente, como lo demuestran las endebles y poco o nada comprometidas doce mociones que se aprobaron. ¿Qué queda de las 24 mociones que se aprobaron el año anterior?

Sin embargo, lo preocupante no es el hecho de que no se haya llegado a análisis serios y objetivos del estado de la nación en los distintos campos de la política gubernamental. Posiblemente ni el sistema, ni el método empleado en los debates son los adecuados para conseguir ese objetivo. Lo preocupante es que ninguno de los líderes políticos, incluido el presidente del Gobierno, respondieron a la pregunta básica: ¿La situación de los españoles en 1984 es mejor que en 1982?

Yes que para poder responder a esta pregunta, no es suficiente analizar los datos macroeconómicos y menos si el análisis es parcial, por no decir partidista, sino que hay que preguntárselo a los españoles. Esto es ni más ni menos lo que han hecho las encuestas (ver "El País" del 28 de octubre de 1984) que nos ofrecen los siguientes resultados:

— Sólo un 15 por 100 de los españoles consultados piensa que su situación personal ha mejorado durante estos dos últimos años. El 45 por 100 responde que siguen igual y el 33 por 100 considera que su situación ha empeorado. Y si de la pregunta sobre la situación personal, se pasa a

la pregunta sobre cómo ven la situación de los otros, la respuesta es más negativa: el 42 por 100 creen que la situación general ha empeorado.

— Respecto del índice de precios al consumo (no obstante el descenso de la inflación), el 50 por 100 de los encuestados opinan que este problema ha empeorado y sólo el 27 por 100 piensa que va mejor. Y nadie cree que este problema esté solucionado.

— Con relación a la inseguridad ciudadana, otro de los platos fuertes del debate, el 50 por 100 de los españoles piensa que ha empeorado la situación. Sólo un 19 por 100 cree que está en vías de solución y el 23 por 100 opina que sigue igual.

— El paro y la situación general de la economía son los dos problemas que más preocupan. Así el 69 por 100 de los encuestados dicen que la situación de desempleo está empeorando, un 15 por 100 responde que sigue igual y sólo un escaso 13 por 100 piensa que está en vías de solución. Y por lo que se refiere a la situación económica, no sólo nadie piensa que está solucionada, sino que el 47 por 100 responde que ha empeorado, un 20 por 100 que sigue igual y un 25 por 100 que está en vías de solución.

Es cierto que la visión de los españoles sobre otras cuestiones importantes, como son las libertades públicas, el terrorismo, las relaciones exteriores y la corrupción administrativa, es más positiva. Así, por ejemplo, el 46 por 100 opina que las libertades públicas han mejorado, frente a sólo el 15 por 100 que cree han empeorado; el 47 por 100 (en el País Vasco sólo el 30 por 100) piensa que el problema del terrorismo ha mejorado, frente a un 23 por 100 que sigue creyendo que ha empeorado; el 48 por 100 reconoce que las relaciones exteriores/internacionales han mejorado o se encuentran en vías de solución, frente a sólo un 12 por 100 que cree han empeorado. Y por lo que se refiere a la lucha contra la corrupción administrativa, un 35 por 100 piensa que la situación ha mejorado, un 26 por 100 opina que este problema sigue igual y un 16 por 100 cree que todo sigue igual.

Al margen de las matizaciones o correcciones que se puedan hacer en la lectura e interpretación de todos estos datos, lo cierto es que una valoración de conjunto de todos ellos nos conduce a la conclusión de que la visión que tienen los ciudadanos españoles de la situación española en 1984, no coincide ni con la visión optimista que ofreció a los diputados el presidente de Gobierno, ni con la visión un tanto catastrófica que dibujó el líder de la oposición mayoritaria en la misma Cámara. Este manifiesto distanciamiento entre la realidad tal como la está viviendo el pueblo y los análisis de esa misma realidad realizados por el jefe del Gobierno y el jefe de la oposición mayoritaria, es la causa de que descienda en los ciudadanos el interés por la política y se incremente la desconfianza en los partidos políticos de uno u otro signo.

No obstante, el debate sobre el estado de la nación ha tenido este año una novedad que para nosotros consiste en lo que podríamos llamar la "vuelta al consenso" o lo que es lo mismo "la vuelta al realismo".

Nos referimos no sólo a la propuesta de Felipe González de los 10

EDITORIAL

puntos para establecer un consenso entre todas las fuerzas políticas en materia de seguridad nacional y para la permanencia de España en la OTAN, sino al alcance que puede tener la moción 10 que fue aprobada. Dice así esta moción: El Gobierno se compromete a procurar un pacto de Estado entre todos los grupos y fuerzas parlamentarias a fin de coordinar los esfuerzos para superar la crisis, vencer el paro, culminar el proceso autonómico y lograr la plena inserción de España en el sistema defensivo occidental.

Sinceramente echamos de menos algunos capítulos o temas importantes en el contenido de esa moción y que por consiguiente quedarán fuera del "posible" pacto de Estado. Estos son principalmente, la reforma de la Seguridad Social que se está retrasando en exceso y que está fuertemente condicionada por la crisis económica. No se puede resolver la crisis de la una sin resolver la crisis de la otra. La incorporación de España a la CEE que va tener efectos traumáticos sobre muchas empresas y sectores. Y finalmente el "pacto escolar", no sólo en lo que se refiere a la aplicación de la LODE, sino en todo lo referente a la iniciada reforma de las enseñanzas medias.

Entre otros motivos, nos congratulamos de la vuelta al consenso, al pacto de Estado, en definitiva al realismo, porque no existe una "alternativa" a la actual política económica por parte de la oposición; porque lo exige la situación de paro a que estamos llegando y porque la crítica constructiva de la oposición y de la sociedad dejaría de estar bloqueada por la izquierda socialista en el Gobierno y el Parlamento.

El presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación pidió a los grupos parlamentarios que si tenían una "alternativa" a la política económica gubernamental, la expusieran porque él estaba "abierto a toda clase de sugerencias". Y ninguno de ellos presentó una nueva forma de hacer política económica. A lo sumo se hicieron algunas críticas referentes a determinados aspectos de la política monetaria y fiscal. Pero nadie ofreció un programa económico mínimo alternativo al que está siguiendo el Gobierno.

*Y sin embargo la salida de la crisis y la creación de empleo están postulando algo así como un pacto de Estado. Porque como escribía un experto en temas económicos al analizar el "Programa Económico 1984-87" del Gobierno "los siete puntos de la política económica (incluidos en este programa) son expuestos y defendidos, una vez más, como una pre-
via aceptación de los actuales niveles de paro, pues, lo único que se va a procurar es que no se destruya más empleo". Si este juicio de valor es objetivo quiere decir que tampoco el Gobierno tiene otra "alternativa" a la política económica que viene practicando y que si bien reduce la inflación, al mismo tiempo crea más paro. Esto es un hecho.*

Desde otro punto de vista más experimental, otro experto como es el presidente de Unión de Explosivos Río Tinto (ERT), llegaba a la conclusión de que es preciso "superar las diferencias partidistas y, con un sentido de Estado, llegar tras un diagnóstico realizado en común a soluciones también comunes. Pero eso significa un gran pacto de todas

las fuerzas sociales, económicas, políticas y sindicales, con una duración de por lo menos seis años, para empezar a crear de verdad empleo, regenerar el tejido empresarial español y poder abordar así una entrada en la CEE con alguna probabilidad de éxito ("Un pacto de Estado contra el paro", en "El País", 2 y 3 de octubre de 1984).

Lo que sucede es que un consenso auténtico, un pacto de Estado o como se le quiera llamar exige dos grandes renunciaciones. Por una parte, dejar de pensar en las elecciones generales del 86 y en las elecciones sindicales, algo a lo que prácticamente ningún grupo parece estar dispuesto. Y por otra parte, y esto es más fundamental, la izquierda socialista en el partido y en el Gobierno tiene que renunciar a tener el monopolio de la verdad y encajar la crítica constructiva, no sólo de la oposición, sino de los distintos grupos de la sociedad.

Esto segundo está por ver, pues, como escribía con gran agudeza el profesor Antonio Marzal en "La Vanguardia", "la izquierda —los socialistas— supone una epistemología, es decir, unos criterios de validación de los juicios, por los que ella siempre tiene razón, o lo que es lo mismo, por lo que ella no puede ser sometida nunca a otra crítica que no venga formulada desde ella y para ella, único sitio seguro de análisis y de crítica... Todo el que no hable desde la izquierda y para la izquierda, por más razón que aparente tener, sólo es un despreciable reaccionario".

Mientras el PSOE mantenga esta criteriología, ni habrá verdadero cambio, ni auténtico consenso, ni mucho menos algo semejante a un pacto de Estado. Por eso tienen razón quienes piensan que no es serio plantear el consenso en el tema de la OTAN y no estar dispuestos a hacer lo mismo en otros temas tan capitales o más que el problema de la OTAN.